

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El anteproyecto remitido tiene por objeto la creación de una Autoridad Administrativa Independiente, que asuma las competencias de investigación técnica de los accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, hasta ahora atribuidas a tres Comisiones de investigación distintas, adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tal y como señala su Exposición de Motivos, la creación de este único organismo facilitará el aprovechamiento de las economías de escala, como consecuencia de la optimización de estructuras organizativas y de recursos que subyace a la creación de un organismo multimodal único donde actualmente existen tres comisiones de investigación diferenciadas, aunque con metodologías y procedimientos de investigación técnica semejantes. Tal optimización no será óbice para garantizar la necesaria especialización técnica y procedimental, mediante la existencia de tres direcciones de investigación técnica especializadas en cada uno de los modos de transporte. Además, la Autoridad fomentará, se mantendrá al día y empleará enfoques contemporáneos dentro del repertorio de metodologías de investigación.

De este modo, los objetivos que se persiguen, tal y como se destacan en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) son: Reforzar la independencia de la labor actualmente llevada a cabo por las Comisiones de investigación, a través de una figura jurídica que sume a la independencia funcional de la que ya gozan, la independencia orgánica y financiera frente al Ministerio de adscripción; optimizar los recursos empleados en la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte, creando un único organismo, con las sinergias que necesariamente derivan de dicha unificación; disponer la dedicación exclusiva de los miembros del Consejo a sus funciones como tales y establecer el oportuno sistema de incompatibilidades; y establecer un régimen homogéneo en materia de tratamiento de la información obrante en las investigaciones, deber de reserva y relaciones con terceros (víctimas, poderes del Estado, homólogos extranjeros y otros).

Asimismo, continúa la citada MAIN identificando, sucintamente, el régimen jurídico que se establece:

- o Se establece el principio de transparencia y participación de los interesado/as, y se manda a la Autoridad atender a las necesidades razonables de las víctimas y sus familiares sobre el alcance y progreso de la investigación.
- o Se establece que la Autoridad velará por el respeto al principio de cultura justa en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas declarantes en el procedimiento de investigación en los términos establecidos en esta ley.
- o Del conjunto de información obrante en una investigación, tiene la condición de reservada la siguiente: las declaraciones realizadas por personas a la Autoridad en curso de una investigación; la identidad de dichas personas; y cualquier información especialmente sensible (entre otra, la relacionada con la salud).
- o Está obligada a dicha reserva cualquier persona que acceda a la información, bien por formar parte de la investigación, bien por tener relación con ella.
- o Sin perjuicio de lo anterior, el deber de reserva vence ante requerimientos de órganos judiciales, del Ministerio fiscal, de Comisiones parlamentarias; en las actuaciones en las que la Autoridad colabore con homólogos extranjeros, de acuerdo con lo establecido por las normas nacionales, comunitarias e internacionales sobre la materia; así como por decisión de la propia Autoridad, cuando considere que la comunicación de datos es lo más eficaz para prevenir un accidente o incidente grave, o cuando la Autoridad o un órgano judicial consideren motivadamente que los beneficios de la divulgación de los registros para distintos de los establecidos en la ley compensan el posible efecto adverso de su divulgación para la investigación en curso o para futuras investigaciones.

I

El anteproyecto objeto de informe regula la investigación técnica de accidentes e incidentes en el transporte ferroviario, marítimo y de aviación civil, derogando la normativa sectorial existente. La importancia de estas investigaciones, cuya finalidad específica es el establecimiento de las causas de un accidente o incidente y la formulación, en su caso, de las recomendaciones de seguridad que resulten pertinentes, con el fin último de

mejorar la seguridad y prevenir accidentes, ha dado lugar a una extensa normativa, tanto a nivel nacional como europeo, e implica unas importantes facultades de los investigadores para obtener toda la información y pruebas pertinentes para la realización de la investigación técnica, estableciéndose un deber de reserva respecto de determinada información, en los términos que el mismo establece. Información que, en muchas ocasiones, incluirá datos de carácter personal, tal y como posteriormente se analizará.

De este modo, el anteproyecto tiene una especial trascendencia desde la perspectiva de la protección de datos personales, debiendo ajustarse a las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

No obstante, pese a la trascendencia de dichos tratamientos, la MAIN no contiene referencia alguna a la protección de datos personales, sin perjuicio de la remisión a la misma en el momento de contestar a las observaciones presentadas en el trámite de consulta pública. Del mismo modo, el texto remitido, pese a la referencia a otros principios, como el de transparencia o el de cultura justa, no contiene una referencia expresa a la necesidad de cumplir con la normativa sobre protección de datos personales, con la única excepción del apartado 3 del artículo 17, limitado a la información que se facilite de las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas.

De este modo, hubiera sido conveniente que en la MAIN se hubieran analizado, con el detalle necesario, los distintos tratamientos de datos personales que pueden realizarse al amparo de esta norma, teniendo en cuenta la finalidad específica que la misma persigue, que no es otra que la de identificar las causas del accidente o incidente y formular las oportunas recomendaciones de seguridad, “con el fin último de mejorar la seguridad y prevenir accidentes”, teniendo en cuenta que “La investigación técnica que se lleve a cabo no perseguirá la determinación de responsabilidad ni la atribución de culpabilidad”.

Partiendo de esa finalidad, deberían haberse justificado en la MAIN determinadas opciones que adopta el legislador, como las relativas a la comunicación de los datos personales reservados, singularmente a las autoridades judiciales o administrativas y la articulación de la colaboración con estas autoridades, que prevé el intercambio de información con las mismas. Especialmente, debería especificarse la forma en que se articula la comunicación de la información que tiene carácter reservado a los órganos

judiciales y al Ministerio Fiscal, al objeto de articular con las garantías adecuadas el cumplimiento de la finalidad específica de la investigación con la propia del proceso penal, dirigida a la determinación de las correspondientes responsabilidades penales.

A este respecto, teniendo en cuenta que el tratamiento de datos personales viene impuesto o legitimado por el Derecho de la Unión y de los Estados miembros, procede recordar el criterio que viene reiterando esta Agencia al informar los proyectos de ley que tienen una especial incidencia en el tratamiento de datos personales, respecto a la necesidad de evaluar adecuadamente su impacto y poder adoptar las garantías legales oportunas.

En este sentido, en el Informe 86/2021, referente al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y de abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, recordábamos lo siguiente:

Tal y como resulta del apartado anterior, los tratamientos de datos personales por el Sistema de Registros queda sujeto a la normativa general sobre protección de datos de carácter personal, y en la medida en que los mismos se fundamentarán en el cumplimiento de una misión de interés público o de obligaciones legales, su régimen deberá establecerse por una norma con rango de ley, tal y como resulta de las previsiones del RGPD y la LOPDGDD y de la jurisprudencia del TJUE y de nuestro Tribunal Constitucional.

A este respecto, el artículo 8 de la LOPDGDD recoge el principio constitucional de reserva de ley:

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas

adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley

Asimismo, deberá tenerse en cuenta la doctrina constitucional recogida, fundamentalmente en las citadas sentencias 292/2000 de 30 noviembre y 76/2019 de 22 de mayo, conforme a la cual los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, de modo que dicha norma con rango de ley *“ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica”, esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).*

Asimismo, deberá establecer las garantías adecuadas, siendo la propia ley la que habrá de contener las garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro en cuanto a que la previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. Solo ese entendimiento es compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE (...). Es evidente que, si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. (...). Se trata, en definitiva, de “garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental”. Tampoco sirve por ello que para el establecimiento de

dichas garantías adecuadas y específicas la ley se remita al propio RGPD o a la LOPDGDD.

Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo [RTC 1996, 55] , FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre [RTC 1996, 270] , F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero [RTC 1998, 37] , F. 8; 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 186] , F. 6).”

La misma doctrina sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.

La STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda que:

En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos

fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

Igualmente, el apartado 65 de la Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17), Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros, con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:

65 Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice: Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].

Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos,

Y en dicha STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):

176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías

suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de tales garantías reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado [véase, en este sentido, el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 140 y 141 y jurisprudencia citada).

Partiendo de las normas y de la doctrina jurisprudencial citada, esta Agencia viene señalando en sus informes más recientes la necesidad de que, por parte del legislador, al introducir regulaciones en nuestro ordenamiento jurídico que tengan especial trascendencia en los tratamientos de datos de carácter personal, se proceda previamente a un análisis de los riesgos que puedan derivarse de los mismos, incluyendo en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo un estudio sistematizado del impacto que en el derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados han de tener los distintos tratamientos de datos que prevé la ley. En este sentido se han pronunciado el Informe 77/2020, relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje en el Deporte o el Informe 74/2020 referido al Anteproyecto de Ley de memoria democrática.

Como consecuencia de lo indicado, esta Agencia considera necesario que se realice, con intervención del delegado de protección de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un análisis de riesgos y, en su caso, una Evaluación de impacto en la protección de datos, que permita identificar las garantías necesarias que habría que trasladar al presente texto legal.

Asimismo, conviene recordar, tal y como se ha señalado en anteriores informes, que dada la trascendencia que tiene la garantía del derecho fundamental a la protección de datos personales y con la finalidad de permitir que las disposiciones normativas que se tramitan recojan las garantías específicas que resulten necesarias, esta Agencia considera necesario que se impulse una modificación del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, con el fin de que se incluyan, tanto en el contenido de la memoria de análisis de impacto normativa como en el de la memoria abreviada, el impacto en la protección de datos personales.

II

Entrando ya en el análisis del articulado, el anteproyecto remitido contiene referencias a determinados principios de especial importancia en el ámbito regulado, como son los principios de transparencia, de participación de los interesados y cultura justa, recogidos en el artículo 7 del anteproyecto y a los que posteriormente nos referiremos.

No obstante, en la tramitación de los procedimientos de investigación técnica adquiere notoria importancia, en cuanto derecho fundamental, el principio de la protección de los datos de carácter personal, tal y como específicamente se contempla en la normativa europea.

En este sentido, el Reglamento (UE) Nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE, en su Considerando 34, señala que *“Las normas relativas a los datos, el tratamiento de datos y la protección de las personas establecidas en los actos jurídicos pertinentes de la Unión deben respetarse plenamente en la aplicación del presente Reglamento”*. Y, consecuentemente, en su artículo 22, bajo la rúbrica “Acceso a los documentos y protección de los datos personales”, dispone en su apartado 2:

2. *El presente Reglamento se aplicará de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.*

Igualmente, la Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su Considerando 15, prevé que *“La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”*.

En todo caso, la necesidad de cumplir con la normativa sobre protección de datos personales deriva, actualmente, de la aplicación directa del RGPD, el cual establece, según su artículo 1.1. *“las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos”*, siendo de aplicación *“al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero”*, por lo que resultará de aplicación a los tratamientos de datos personales de personas físicas identificadas o identificables (artículo 4.1. del RGPD) que puedan realizarse en el ámbito de aplicación del anteproyecto, complementado por las previsiones contenidas en la LOPDGDD.

Por ello, y sin perjuicio de las garantías específicas que, en su caso y como consecuencia de los análisis de riesgos indicados en el apartado anterior, proceda trasladar al texto, debe introducirse en su articulado un artículo específico que incluya una cláusula general de respeto de la normativa de protección de datos personales, en la que se indique que los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales.

En este sentido, se debe ser extremadamente cauteloso en la aplicación del principio de limitación de la finalidad y el de minimización, así como del resto de los principios contenidos en dicha normativa, actuando en todo caso la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los modos de transporte conforme al principio de responsabilidad proactiva.

III

En relación con la licitud de los tratamientos de datos personales que se realicen por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los modos de transporte, los mismos vendrán legitimados, con carácter general, por lo dispuesto en la letra e) del artículo 6.1. del RGPD: *el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*, cumpliéndose con el principio de reserva de ley que, derivado del artículo 53 de la Constitución, se recoge en el artículo 8.2. de la LOPDGDD: *El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el*

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Asimismo, teniendo en cuenta que, en el curso de las investigaciones, puede ser necesario tratar categorías especiales de datos, como son los datos de salud de los afectados, la prohibición de su tratamiento se levantaría por la circunstancia prevista en el artículo 9.2.g) del RGPD: *el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.* Dentro de las garantías específicas a las que se refiere el precepto, destaca el deber de reserva respecto de determinada información, al que posteriormente nos referiremos.

No obstante, la licitud del tratamiento de los datos personales no exime de cumplir con el resto de principios establecidos en el artículo 5 del RGPD, singularmente, tal y como se ha avanzado, con los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos.

En relación con el principio de limitación de la finalidad, debe partirse de lo dispuesto en el artículo 3 del anteproyecto:

Artículo 3. Finalidad de la investigación técnica de accidentes e incidentes.

1. La investigación técnica tiene como finalidad el establecimiento de las causas de un accidente o incidente y la formulación, en su caso, de las recomendaciones de seguridad que resulten pertinentes, con el fin último de mejorar la seguridad y prevenir accidentes.

2. La investigación técnica que se lleve a cabo no perseguirá la determinación de responsabilidad ni la atribución de culpabilidad.

La aplicación de dicho principio implica que los datos personales deberán ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Al mismo se refiere el apartado 2 del artículo 16, al regular la información de la investigación:

La información de la investigación sólo podrá ser utilizada para los fines propios de la misma, sin perjuicio del derecho de información de las víctimas, sus familiares y las asociaciones de víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate, así como del derecho de acceso a la información por parte de terceras personas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley

Dentro de dicha información se encuentra la que tiene carácter reservado, a la que se refiere el apartado 2 del mismo artículo 16 y que comprende, en todo caso, datos de carácter personal:

2. Será información de carácter reservado, la siguiente:

- a) Los testimonios de las y los testigos, así como otras declaraciones, descripciones y anotaciones realizadas o recibidas por la Autoridad en el curso de la investigación.*
- b) Los documentos que revelen la identidad de las personas que hayan testificado en el contexto de la investigación.*
- c) La información sobre las personas implicadas en el accidente o incidente, cuando ésta sea especialmente sensible o de carácter privado, incluida la información sobre su estado de salud.*

Por otro lado, la ley se refiere, asimismo, a las personas declarantes, si bien parece limitarlo a las “personas profesionales” en su artículo 11:

Artículo 11. Derechos de las personas declarantes.

- 1. Las personas profesionales a las que se exija prestar testimonio serán informadas de la naturaleza y bases de la investigación técnica sobre el accidente o incidente.*
- 2. Dichos personas tendrán acceso a asesoramiento jurídico y serán informadas de:*
 - a) El posible riesgo de que su testimonio pueda servir para su inculpación en un procedimiento subsiguiente a la investigación.*
 - b) Todas las garantías que se le pueden ofrecer para evitar que su testimonio pueda usarse en su contra.*

En cuanto a las excepciones a la limitación de la finalidad y, consecuentemente, la comunicación de datos personales para finalidades distintas de la original, se incluirían:

- El derecho de información de las víctimas, sus familiares y las asociaciones de víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate, que se regula en el artículo 17.
- El derecho de acceso a la información por parte de terceras personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del anteproyecto.
- Los supuestos de comunicación de la información de carácter reservado del artículo 19.2.

En todos estos supuestos, sería la propia ley la que estaría legitimando el tratamiento para una finalidad distinta, que de este modo se está considerando compatible, lo que resulta admisible al amparo del artículo 6.4. del RGPD siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el mismo: *que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23.*

A este respecto, el artículo 23 establece los objetivos y los requisitos aplicables:

1. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 5 en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 12 a 22, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar:

- a) la seguridad del Estado;*
- b) la defensa;*
- c) la seguridad pública;*
- d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención;*
- e) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social;*
- f) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales;*
- g) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas;*
- h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g);*
- i) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros;*
- j) la ejecución de demandas civiles.*

2. En particular, cualquier medida legislativa indicada en el apartado 1 contendrá como mínimo, en su caso, disposiciones específicas relativas a:

- a) la finalidad del tratamiento o de las categorías de tratamiento;*
- b) las categorías de datos personales de que se trate;*
- c) el alcance de las limitaciones establecidas;*
- d) las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos;*
- e) la determinación del responsable o de categorías de responsables;*

f) los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;

g) los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y

h) el derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser perjudicial a los fines de esta.

Partiendo de lo anterior, procede analizar cada caso por separado, comenzando por los dos primeros que se ampararían en la existencia de objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro.

IV

En primer término, se plantea la comunicación a las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate, regulada en el artículo 17 del anteproyecto:

Artículo 17. Información a las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate.

1. La Autoridad atenderá las necesidades de las víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate y sus familiares, manteniéndoles informados, de manera clara y asequible, sobre el alcance y el progreso de la investigación realizada.

2. Siempre que la Autoridad considere que no se perjudican los objetivos de una investigación en curso, se facilitará a las víctimas, sus familiares y a las asociaciones de víctimas del accidente o incidente objeto de investigación que, en su caso, se constituyan, la siguiente información, antes de hacerla pública:

a) La factual sobre el accidente o incidente, dentro de las 48 horas siguientes a la producción de éste.

b) Las observaciones factuales realizadas durante la investigación del accidente o incidente, los procedimientos empleados, los avances de la investigación, las recomendaciones de seguridad emitidas, el contenido de los informes preliminares, las declaraciones provisionales e informes finales y las conclusiones y recomendaciones de la investigación técnica.

3. La Autoridad garantizará, en todo caso, que la información que se facilite de acuerdo con el presente artículo es conforme con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y recordará a las y los destinatarios de la información la vinculación a dicha normativa de cualquier cesión a terceras partes.

De acuerdo con la citada redacción, dichas comunicaciones podrán incluir datos de carácter personal, tal y como resulta de la previsión del apartado 3. Asimismo, podrá incluir, incluso, información de carácter

reservado, tal y como resulta del artículo 19, apartado segundo, del anteproyecto, que incluye entre las personas sujetas al deber de reserva a “*las víctimas, sus familiares y asociaciones de víctimas del accidente o incidente objeto de investigación*”.

Este precepto se debe poner en relación con los principios reconocidos en el artículo 7 del anteproyecto:

Artículo 7. Principios de transparencia, de participación de los interesados y cultura justa.

1. La investigación de los accidentes e incidentes se llevará a cabo con criterios de máxima transparencia, permitiendo el acceso a la información de las víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate y de las partes interesadas, oyendo a todas las partes y compartiendo los resultados, sin perjuicio de lo establecido en materia de tratamiento de la información reservada por todas las personas que tengan acceso a la misma, en los términos previstos en esta ley. Para ello se llevarán a cabo las sesiones informativas que se consideren necesarias.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la Autoridad podrá, mediante resolución motivada, limitar o denegar el acceso de todos o algunos de las personas interesadas en la investigación a la información relativa a la misma. En todo caso, la Autoridad tendrá en cuenta las necesidades de las víctimas directamente relacionadas con la investigación técnica de que se trate y de sus familiares y los mantendrá informados de los avances de la investigación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta Ley.

3. En el marco de la investigación se dará la oportunidad de facilitar información técnica pertinente a los administradores de infraestructuras, a las empresas que realizan servicios transporte, actividad pesquera o explotación e investigación de hidrocarburos off-shore, a las personas que desempeñen una función relacionada con la instalación, modificación, mantenimiento, reparación, revisión, control en vuelo o inspección de instalaciones de navegación aérea, a proveedores de servicios, a las autoridades nacionales de seguridad, a las Agencias competentes de la Unión Europea, a las víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate y a sus familiares, a las personas propietarias de bienes dañados, a las y los fabricantes, a los servicios de socorro implicados y a las y los representantes del personal y de las personas usuarias.

A estos efectos, en la investigación de accidentes marítimos y de aviación civil se estará a lo dispuesto, respectivamente, en el Capítulo 13 de la parte I del Código de investigación de siniestros (Código de Normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos de seguridad y siniestros y sucesos marítimos), y en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Reglamento UE 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.

4. La Autoridad velará por el respeto al principio de cultura justa en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas declarantes en el procedimiento de investigación en los términos establecidos en esta ley.

La justificación de la inclusión de estos principios se realiza en la exposición de motivos en los siguientes términos:

En primer lugar, se establece el principio de apertura y participación de las personas afectadas en las investigaciones, lo que no sólo es coherente con los principios de participación, proximidad a las personas ciudadanas, eficacia y eficiencia consagrados en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sino que además está expresamente previsto en la normativa comunitaria en el ámbito ferroviario, y no colisiona con la aplicable a la investigación técnica de accidentes marítimos o de aviación civil. Dicho principio debe guardar, en todo caso, justo equilibrio con el deber de reserva que impera sobre la investigación técnica, pues la información a proporcionar a las personas interesadas se centra en la situación de dicha investigación, y no en los medios de prueba utilizados en la misma, a lo que se añade la posibilidad de que el organismo competente para las investigaciones limite, caso por caso, motivada y excepcionalmente, estos principios de apertura y participación, o incluso llegue a prescindir de ellos.

Este principio aparece igualmente reconocido en la legislación europea, como se observa en el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE cuyo artículo 15, referido a la comunicación de la información, en su apartado 4, dispone lo siguiente:

Se autorizará a la autoridad encargada de las investigaciones de seguridad a informar a las víctimas y a sus familiares, o a sus asociaciones, o a publicar cualquier información sobre las observaciones factuales, los procedimientos de la investigación de seguridad, posibles informes preliminares o conclusiones o recomendaciones en materia de seguridad, siempre que ello no perjudique a los objetivos de la investigación de seguridad y se respete plenamente la legislación aplicable a la protección de datos personales.

Por consiguiente, la finalidad pretendida con esa comunicación es la de facilitar información sobre el avance de la investigación, que deberá respetar plenamente la normativa sobre protección de datos personales, lo que implica de nuevo citar los principios de limitación de la finalidad,

proporcionalidad y minimización de datos. Por lo tanto, debería valorarse, mediante los análisis de riesgos a los que se ha hecho referencia en el primer apartado del presente informe y atendiendo a la experiencia, la necesidad de facilitar datos personales con la finalidad de mantener informadas a las víctimas, sus familiares y a las asociaciones.

En el caso de que no resulte necesario, debería recogerse en el apartado 3 del artículo 17 que dicha información se facilitará previa disociación de los datos de carácter personal. Si resultara necesario, en determinadas circunstancias, facilitar el acceso a los datos de carácter personal, debería recogerse expresamente la limitación a aquellos que resulten estrictamente necesarios, actuando, en el presente caso y como garantía específica, el deber de reserva respecto de los datos personales que tienen carácter reservado. Respecto de los que no lo tengan, teniendo en cuenta que la excepcionalidad en el acceso y que la finalidad pretendida se cumple con la comunicación a las víctimas, sus familiares y, en su caso, a las asociaciones, debería introducirse, como garantía específica, la prohibición de su comunicación ulterior, salvo en aquellos casos en que resulte necesario para el ejercicio de sus derechos.

IV

En segundo lugar, el artículo 18 se refiere al régimen jurídico del acceso a la información, diferenciando entre la información de carácter no reservado, que se regirá por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la de carácter reservado, en la que la regulación del anteproyecto tendrá la consideración de regulación especial:

Artículo 18. Régimen jurídico de acceso a la información.

1. Las solicitudes de acceso a la información de carácter no reservado, obtenida en el marco de una investigación técnica, o de otra información obrante en la Autoridad, se sujetarán íntegramente a lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Respecto a la información de carácter reservado obtenida en el marco de una investigación técnica, las disposiciones de esta Ley constituyen una regulación especial del derecho de acceso a la información pública, de las previstas en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, norma que resultará de aplicación supletoria a dichas solicitudes en todo lo no previsto específicamente en la presente Ley.

Por consiguiente, para facilitar el derecho de acceso a los datos personales que no tengan el carácter de reservado, deberá aplicarse la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, singularmente su artículo 15. En cuanto a los que

tienen carácter reservado, quedaría excluido su acceso al amparo de la Ley 19/2013, procediendo su comunicación únicamente en los supuestos contemplados en el anteproyecto, preservando, de este modo, la garantía específica derivada del deber de reserva.

V

Por último, procede analizar los supuestos de comunicación de la información de carácter reservado contemplados en el apartado 2 del artículo 19, comenzando por su letra a), referida a la comunicación *cuando sea requerida por los órganos judiciales o por el Ministerio Fiscal para la investigación y persecución de delitos*.

En el presente caso, se trataría de un supuesto de tratamiento para una finalidad distinta, amparado en lo previsto en la letra d) del artículo 23.1. del RGPD, al ser necesario para salvaguardar: *la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención*;

No obstante, en el presente caso se plantea el problema de su proporcionalidad, teniendo en cuenta que dicha comunicación se realiza con la finalidad de investigación y persecución de delitos y, por tanto, para atribuir responsabilidades penales, cuando la finalidad de la investigación técnica *“no perseguirá la determinación de responsabilidad ni la atribución de culpabilidad”*.

La trascendencia de la finalidad preventiva se pone de manifiesto en los Considerandos del propio Reglamento (UE) nº 996/2010:

(22) El sistema de seguridad de la aviación civil se basa en las reacciones y las enseñanzas derivadas de los accidentes e incidentes, lo que requiere una estricta aplicación de las normas sobre confidencialidad para garantizar la disponibilidad futura de fuentes de información valiosas. En este contexto, los datos de seguridad sensibles deben protegerse adecuadamente.

(23) Un accidente suscita toda una serie de intereses públicos diferentes, como la prevención de futuros accidentes y la buena administración de la justicia. Esos intereses van más allá de los intereses individuales de las partes involucradas y del suceso específico. A fin de garantizar el interés público general, es necesario un equilibrio justo entre todos los intereses.

(24) El sector de la aviación civil debe promover asimismo un entorno no punitivo que facilite la notificación espontánea de sucesos, haciendo avanzar así el principio de una «cultura de la equidad».

(25) La información proporcionada por una persona en el marco de las investigaciones de seguridad no debe utilizarse contra dicha persona, de conformidad con los principios constitucionales y del Derecho nacional.

(26) Los Estados miembros deben poder limitar los casos en los que puede adoptarse una decisión de divulgación relativa a la información obtenida durante una investigación de seguridad sin afectar al buen funcionamiento del sistema judicial.

En este mismo sentido se pronuncia la Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo artículo 4, referido al “Estatuto de la investigación de seguridad” señala en su apartado 1 lo siguiente:

1. De conformidad con sus ordenamientos jurídicos, los Estados miembros definirán el estatuto legal de la investigación de seguridad de modo que estas investigaciones puedan ser efectuadas de la manera más eficaz y rápida posible.

Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a sus respectivas legislaciones y, en su caso, a través de la colaboración con las autoridades responsables de la investigación judicial, que las investigaciones de seguridad:

a) se lleven a cabo con independencia de las investigaciones penales o de otra índole realizadas paralelamente para determinar la responsabilidad o atribuir la culpa, y

b) no puedan verse indebidamente impedidas, suspendidas o retrasadas a causa de tales investigaciones.

Asimismo, la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad, ya señalaba en su Considerando 23 que “Los accidentes graves en los ferrocarriles ocurren rara vez pero pueden tener consecuencias desastrosas y suscitar la preocupación del público sobre la seguridad del sistema ferroviario. Por consiguiente, todos estos accidentes deben investigarse desde la perspectiva de la seguridad con el fin de evitar que se repitan y los resultados de dicha investigación deben hacerse públicos. Otros accidentes e incidentes podrían ser precursores significativos de los accidentes graves y deben también someterse a una investigación sobre la seguridad, en caso necesario” añadiendo en su Considerando 24 que “La investigación sobre la seguridad debe mantenerse separada de la investigación judicial del mismo incidente y debe concedérsele el acceso a pruebas y testigos. Debe llevarla a cabo un

organismo permanente, independiente de las partes implicadas en el sector ferroviario.[...]. Y la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad ferroviaria, establece en su artículo 21.4. que *“La investigación se efectuará de modo independiente respecto de cualquier investigación judicial”*.

Por consiguiente, deben establecerse las garantías específicas necesarias al objeto de evitar que los datos de carácter personal sean tratados para una finalidad distinta que puede determinar su responsabilidad sin el conocimiento del afectado. A estos efectos, el artículo 11 establece lo siguiente:

Artículo 11. Derechos de las personas declarantes.

- 1. Las personas profesionales a las que se exija prestar testimonio serán informadas de la naturaleza y bases de la investigación técnica sobre el accidente o incidente.*
- 2. Dichos personas tendrán acceso a asesoramiento jurídico y serán informadas de:*
 - a) El posible riesgo de que su testimonio pueda servir para su inculpación en un procedimiento subsiguiente a la investigación.*
 - b) Todas las garantías que se le pueden ofrecer para evitar que su testimonio pueda usarse en su contra.*

Esta Agencia considera conveniente que en el texto de dicho precepto se haga referencia, aunque no sea exhaustiva, a cuáles son las garantías a las que se refiere su apartado 2.b., así como que se incluya un apartado específico referido a la información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Asimismo, puede considerarse como garantía específica la prevista en el apartado 3, tanto respecto de las comunicaciones a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal como a las Comisiones Parlamentarias de Investigación, previendo el anteproyecto que éstos dirijan la oportuna comunicación a la Autoridad, para que alegue lo que considere sobre la conveniencia de mantener la reserva o postergar la cesión de la información, o sobre dar audiencia a terceros que pudieran verse afectados por el levantamiento del deber de reserva, resolviendo la institución requirente sobre el levantamiento o no del deber de reserva:

- 3. En los supuestos previstos en los párrafos a) o b) del apartado anterior, el órgano que requiera la información de carácter reservado realizará una comunicación a la Autoridad, informándole sobre el requerimiento que tenga previsto realizar, con carácter previo a que le sean aportados los documentos, se hagan las diligencias de investigación o se cite a una persona obligada por el deber general de reserva para tomarle declaración.*

Dicha comunicación previa a la Autoridad tendrá por finalidad que ésta pueda manifestar lo que estime procedente sobre las siguientes cuestiones:

a) La oportunidad de preservar el carácter reservado de la información requerida.

b) La conveniencia de diferir la aportación de documentación, las diligencias de investigación o la declaración, a fin de que las mismas no afecten a una investigación técnica en curso.

c) La oportunidad de dar audiencia a terceras partes que pudieran verse afectadas por la aportación de documentación, las diligencias de investigación o la declaración.

d) En caso de citaciones a personas adscritas a la Autoridad, la idoneidad de la persona citada para emitir declaración sobre una investigación técnica concreta y la posibilidad de que preste declaración otra persona adscrita a la Autoridad que ésta considere más adecuada.

No obstante, no se recogen algunas de las garantías específicas contenidas en la normativa vigente. Por ejemplo, el artículo 19.1.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, prevé, para el supuesto de requerimiento de los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal, que *“La Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil remitirá la información necesaria, limitándose a facilitar los antecedentes que obren en su poder en relación a los factores contribuyentes que hayan provocado un accidente o incidente aéreo. La identificación de los factores no implica la asignación de la culpa o la determinación de la responsabilidad, civil o penal”*.

Teniendo en cuenta la independencia entre ambos procedimientos y las distintas finalidades perseguidas por uno y otro, debería valorarse la inclusión de dicha garantía específica.

Respecto de la comunicación a las Comisiones Parlamentarias de Investigación, contempladas en la letra b) del apartado 2 del artículo 19, su fundamento, de nuevo, se encontraría en la existencia de objetivos importantes de interés público general, conforme a la letra e) del artículo 23.1. del RGPD, en relación con el artículo 76 de la Constitución, los Reglamentos del Congreso y del Senado y la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras.

En este supuesto, debería valorarse incluir la posibilidad de que la Autoridad pueda solicitar motivadamente que las sesiones de dichas Comisiones parlamentarias se declaren secretas, tal y como prevé actualmente el artículo 19.1.b) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Por último, procede hacer referencia a los supuestos contemplados en los apartados d) y e) del artículo 19.2. del anteproyecto:

d) En los supuestos en que el Consejo de la Autoridad considere que la comunicación de datos sea lo más eficaz para prevenir un accidente o incidente grave.

e) Cuando el Consejo de la Autoridad o un órgano judicial, consideren motivadamente que los beneficios de la divulgación de los registros, para fines distintos a los previstos en esta Ley, compensan el posible efecto adverso de dicha divulgación para la investigación en curso o para futuras investigaciones.

En estos casos, deberían identificarse las categorías de datos personales cuya difusión podría acordarse por el Consejo de la Autoridad, teniendo en cuenta que en el primer supuesto estaría relacionado con los fines de la investigación y, en el segundo, con finalidades diferentes, así como que dentro de la información de carácter reservado se recogen supuestos diferentes que incluyen, además de las testimonios de las personas que han testificado, los documentos que revelan su identidad y la información sobre las personas implicadas en el accidente o incidente, cuando ésta sea especialmente sensible o de carácter privado, incluida la información sobre su estado de salud. En este sentido, y atendiendo a los análisis de riesgos que deberían realizarse, conforme a lo indicado en el apartado primero de este informe, deberían establecerse garantías específicas, como la correspondiente disociación de los datos de carácter personal, cuando los mismos no sean necesarios para la finalidad pretendida.

VI

Del mismo modo, atendiendo a los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos, el artículo 13 regula el informe final, señalando en el párrafo segundo que *“el informe final sólo incluirá aquella información que sea pertinente para el análisis del accidente o incidente”*.

A este respecto, dicho informe únicamente incluirá datos de carácter personal que no tengan carácter reservado cuando sea pertinente. No obstante, teniendo en cuenta que el apartado 2 prevé la publicación del informe, debería recogerse que, con carácter general, dicha publicación se realizará previa disociación de los datos de carácter personal.

VII

Por otro lado, en cuanto a la aplicación del principio de minimización de datos en el ámbito de las actuaciones investigadoras, el mismo implica que los datos personales que puedan tratarse en las mismas serán *“adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”*.

A este respecto, como manifestación de dicho principio, el artículo 8, al regular las facultades del equipo investigador, en su apartado 4. letra c) referido al ámbito de las investigaciones de accidentes o incidentes ferroviarios, recoge expresamente en los números 4º y 5º la posibilidad de acceder a datos de salud cuando *“pudiera ser relevante para la investigación ferroviaria”*:

4º. Acceder a los resultados del examen pericial médico-forense de los cuerpos de las víctimas, cuando pudiera ser relevante para la investigación ferroviaria.

5º. Acceder a los resultados de los exámenes y análisis médicos del personal a bordo del tren y de cualquier otro personal ferroviario implicado en el accidente o incidente, cuando pudiera ser relevante para la investigación ferroviaria.

Dicha previsión resultará de aplicación en todos los supuestos de acceso a datos de carácter personal, en la medida en la que solo procederá cuando sea necesario para la finalidad de la investigación, por lo que se propone la inclusión, en dicho artículo, de una cláusula general que contemple la facultad de los investigadores o investigadoras de acceder a datos de carácter personal cuando pudiera ser relevante para la investigación del accidente o del incidente.